



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO:	11001-33-35-026-2021-00239-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	CARLOS ORLANDO DÍAZ TRIANA
DEMANDADA:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Dentro del presente asunto, el abogado **OSCAR DARÍO SAAVEDRA ORDOÑEZ**, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en representación del señor **CARLOS ORLANDO DÍAZ TRIANA**, ello con la finalidad de que se declare la nulidad del acto administrativo 0120006379702 / MDN-CGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC del 25 de agosto de 2020, mediante el cual se negó el reconocimiento a la pensión de jubilación del demandante y el retiro del Comando General de las Fuerzas Militares.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, se debe recordar que, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

De la misma manera, y a través del Decreto 417 de 2020, el Gobierno Nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las

actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, y dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011, el decreto 806 de 2020 y la ley 2080 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ** LA DEMANDA, por las siguientes razones:

1. Del derecho de postulación.

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

“Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”

Ahora bien, como quiera que el C.P.A.C.A., no consagra lo relativo a la formalidad que deben cumplir los poderes que se presenten ante esta jurisdicción, se hace necesario acudir a la Ley 1564 de 2012 para estudiar este derrotero, ello en aplicación de la remisión que consagra el art. 306 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil, hoy Cogido General del Proceso.

En tal virtud, el artículo 74 del C.G.P., en materia de otorgamiento de poder a los profesionales del derecho para actuar en procesos judiciales, estableció:

“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. **En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.**

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. (...)

(Negrillas del Despacho).

De igual forma, mediante el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, respecto a los poderes a conferir dentro de este nuevo sistema de tecnologías, estableció:

“Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. (...)”

Dicho lo anterior, el Profesional del Derecho, deberá allegar el poder cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley 1437 de 2011, **esto en relación a determinar e identificar**, claramente el acto administrativo susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el presente expediente.

2. Del razonamiento adecuado de la cuantía.

El artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...)”

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo legal mensual vigente aprobado por el Gobierno Nacional es de \$ 908.526, luego entonces, al realizar la operación matemática, tenemos que los 50 S.M.L.M.V. determinados en la norma precitada, equivalen a la suma de \$45.426.300.oo.

En relación a la estimación razonada de la cuantía, la parte actora estima la cuantía en **\$58.700.000**, desbordándose de esta manera la competencia de éste Despacho Judicial para conocer del presente asunto.

De conformidad con lo anterior, se observa que la misma no se realizó de acuerdo a los lineamientos trazados por la ley, sin determinar dicho presupuesto procesal razonadamente, pues recuérdese que la cuantía debe calcularse desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda **sin que supere los tres años**, y sin tomar en cuenta **los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

Lo anterior determina que se realice la estimación razonada de la cuantía cumplimiento de lo previsto en la norma y, vale decir, en el evento hipotético que, aún realizada de manera adecuada la estimación de la cuantía, supere lo

establecido para la competencia de este Despacho, se remitirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su conocimiento.

Así las cosas, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012, Decreto 806 de 2020 y Ley 2080 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por el señor **CARLOS ORLANDO DÍAZ TRIANA** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá llegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AJR

Firmado Por:

Andres Jose

Juez Circuito

**Sala 026
Admsección 2**



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **01 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

Quintero Gnecco

Contencioso

Juzgado Administrativo

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Código de verificación: **Oc4917ecd007ab585039592aba01fc24617a445242bc97c50b2b0ee5c4db6926**

Documento generado en 31/08/2021 11:40:56 a. m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>